

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., Veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022).

REF. MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL SEÑOR JORGE ARMANDO ESPINA ZAPATA EN CONTRA LAS REDES VITALES DE APOYO FAMILIAR (APELACIÓN SENTENCIA). 2022-0118

Se decide la Apelación presentada en contra de la resolución proferida el día 22 de noviembre de 2022, por la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar II de esta ciudad, dentro de la medida de protección indicada en la referencia.

I.- ANTECEDENTES:

1.- EL 03 de junio de 2021, la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar II, recibe requerimiento por parte de la Personería de Bogotá donde se pone en conocimiento la situación de abandono del señor Jorge Armando Espina Zapata, indicando: "...esta Personería Delegada recibió requerimiento por parte del área de trabajo social del Hospital San Rafael, quienes ponen en conocimiento el caso del paciente JORGE ARMANDO ESPINA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía... residente en la dirección..., de 75 años de edad, adscrito a la EPS Compensar, régimen contributivo, quien se encuentra hospitalizado, sin red de apoyo familiar ni social, en presunta condición de abandono, según expresa la entidad hospitalaria contactaron a la señora Mireya Leal al número celular 310... • quien manifiesta que la persona mayor vive en una habitación en arriendo en su casa hace 3 años, ubicada en la dirección..., informando que el paciente es desempleado, viudo y que no tiene hijos ni familia extensa estando en condiciones muy difíciles, en igual sentido indica que colocó un derecho de petición a la SOIS solicitando apoyo para el señor Jorge, pero que la entidad había respondido que él era pensionado y por ende no podría suministrarle ningún apoyo, frente a esa situación puntualiza la señora Mireya Leal "a mí se me hizo extraño porque él nunca me había dicho nada de eso y le dije a él que el si era pensionado porque vivía así en esas condiciones y él me dijo que tampoco sabía de eso". sé informa por parte de Trabajo social que el señor Jorge Armando Espina, se encuentra en aislamiento por Covid- positivo e igualmente que la acudiente dueña del lugar donde vivía no asumirá más la responsabilidad del cuidado del paciente en su vivienda, en este sentido la Institución Hospitalaria pone en conocimiento para el respectivo manejo por las autoridades competentes".

1.- Obra en el expediente informe de grupo del Buen trato del Hospital San Rafael de fecha 21 de mayo de 2021, en el que se indica que: "Se realiza llamada telefónica al número celular... donde contesta la señora Mireya Leal de 43 años de edad, independiente, refiere ser la dueña de la casa donde vive el paciente y con quien se realiza valoración. Acudiente afirma el que paciente vive en una habitación en arriendo en su casa hace 3 años, ubicada en la dirección..., Barrio Vista Hermosa- Ciudad Bolívar, del paciente afirma que es desempleado, viudo y que no tiene hijos, ni familia extensa y comenta "yo a él nunca le he conocido a nadie, él dice que su esposa murió cuando su hijo nació y que ese único hijo que tuvo murió a los 23 años, lo único que habla es de la nieta y la mamá de ella, porque según el hijo cuando murió dejó a la novia embarazada y que ahorita viven fuera de Bogotá, y al parecer de una cuñada, pero yo le he preguntado por los datos de ellos y dice que no sabe nada de ellos, incluso en el celular que él

tenía un día le revise para ver si tenía algún teléfono de familiar y solo tenía mi número y el de otro señor que le ayudaba a él, pero ahorita no tiene teléfono porque se le daño", se indaga sobre condiciones habitacionales y garantiza de necesidades básicas del hogar a lo que manifiesta "doctora le verdad, yo a él lo tengo ahí en la casa como le dije hace tres años, él me paga por el arriendo 100.000 pesos mensuales, pero las cosas que él tiene es porque yo se las regale, él no tenía nada, y él es muy desorganizado y sucio, se orina y se hace popo en la ropa, yo le he tenido mucha paciencia porque es adulto mayor, pero él no le gusta que le diga que se bañe, hasta le digo que le caliento el agua y no, la verdad la casa ya huele muy feo a chichi y popo por todo lado, como le dije le tengo paciencia pero ya no sé qué más hacer, ya siento que no lo puedo tener más, porque eso no solo me perjudica a mi sino a mi familia y los otros inquilinos de ahí que también se me quejan", se indaga si conoce que paciente sea pensionado a lo que manifiesta "pues doctora ese es un rollo largo porque resulta que él hace como 8 meses estaba peor que ahorita, y entonces al verlo así abandonado, en esas malas condiciones pues yo puse un derecho de petición a la secretaria de integración social porque él necesita ayuda, entonces a los 15 días me llegó la respuesta de que ellos no podían brindarle ningún apoyo a Jorgito porque él era pensionado, entonces pues a mí se me hizo extraño porque él nunca me había dicho nada de eso y le dije a él que si él era pensionado porque vivía así, en esas condiciones y él me dijo que él tampoco sabía de eso, entonces él se puso en esas averiguaciones y resulta que efectivamente él aparece como pensionado desde el 2010 por la empresa donde trabajaba, pero que la plata la está reclamando otra persona, entonces como una hija mía es abogada yo le dije que ella le podía ayudar para poder iniciar todo el proceso, y él dijo que no, y parece que él le dio el poder a otra persona que no sabemos quién es, y en eso es que está el proceso". En cuanto al motivo de hospitalización acudiente comenta, lo que pasa es que él llevaba como 10 días enfermo, se llevó al hospital de vista hermosa y ya se peleó con todo mundo y salió voluntariamente, yo lo recogí, él normalmente iba a comer algo que yo le daba pero él no volvió a subir, yo iba y lo miraba y estaba acostado durmiendo, se había puesto bravo conmigo porque yo le decía que se levantara y se bañara, luego como yo tengo que salir a trabajar entonces en el día no podía estar pendiente de él, pero ahí hay una vecina que tiene un restaurante y ella le da sopita todos los días, resulta que él tampoco volvió a ir y ella me cuenta que hace 5 días ella fue y le llevo la sopa y que lo veía malito, al siguiente día también fue y él no había comido nada, entonces para llevarlo allá fue porque ella otra vez lo vio mal, dijo que estaba orinado y poposiado, entonces llamaron la ambulancia y lo llevaron por urgencias, pero la verdad doctora en lo que le puedan ayudar porque él necesita, dicen que no pueden porque es pensionado pero él no la está recibiendo y él está completamente solo, en condición de total vulnerabilidad y yo no creo poder recibirlo más así, ayer que entre a esa habitación estaba todo muy sucio, no tenía un par de medias limpias, la ropa él la compra de segunda, todo estaba orinado y poposiado, yo como pude le saque todo y le hice aseo y le lave la ropa, pero él necesita de un lugar donde lo ayuden, igual yo seguiré atenta a lo que pueda ayudarles dentro de mis capacidades".

2.- El 10 de junio de 2021, el área de trabajo social de la Comisaría de Familia realiza visita domiciliaria al hogar de la señora Mireya Leal, quien manifestó que: "...desconoce la situación actual del adulto mayor el señor Jorge Armando Espina Zapata en razón que desde la fecha que se encuentra hospitalizado no ha vuelto a visitarlo, aduciendo que no puede seguir albergándolo en su lugar de residencia puesto que no cuenta con el tiempo y los recursos para el manejo de sus padecimientos de salud, por lo cual a la fecha continúa internado en el Hospital de San Rafael".

3.- *Obra en el expediente acción de tutela interpuesta por el Hospital Universitario Clínica San Rafael, como agente oficioso del señor Jorge Armando Espina Zapata, acción constitucional en el que la autoridad judicial que la conoció resolvió conceder el amparo constitucional y ordenó entre otras medidas a la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar II de Bogotá, en el ejercicio de sus competencias legales proceder a realizar la las gestiones necesarias para atender la situación de violencia intrafamiliar que padece el actor, y adoptar las medidas de protección necesarias para su reincorporación en un entorno comunitario y superar su situación de internamiento indefinido, para lo cual la secretaría de integración social deberá brindarle su orientación para lograr el citado objetivo...”*

La anterior medida de protección correspondió a la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar II de Bogotá, quien la admitió mediante auto del 8 de octubre de 2021.

Admitida a trámite la anterior solicitud de protección y una vez fenecida la etapa probatoria, procedió el a quo a proferir resolución el día veintidós (22) de noviembre de año 2021, mediante la cual resolvió declarar como no probados los cargos de violencia intrafamiliar que dieron lugar al trámite de medida de protección a favor del señor Jorge Amando Espina Zapata y oficiar a la Secretaría Distrital de Integración Social (sdís) Subdirección para la Vejez, para que adopten las acciones a que haya lugar a favor del adulto mayor Jorge Amado Espina Zapata, de conformidad con las competencias y los criterios establecidos por esa dependencia y atendiendo además, la carencia de redes de apoyo y su alta estancia hospitalaria a la fecha.

Inconforme con el fallo proferido, el representante legal del Hospital Universitario Clínica San Rafael, interpone recurso de reposición en subsidio de apelación, indicando la existencia de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado dentro de la acción constitucional por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Séptima de Decisión Civil, en consecuencia el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, en escrito del 22 de noviembre de 2021, resolvió “vincular en el presente tramite al Defensor de Familia como representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, así como a los ascendientes y/o descendientes del señor Jorge Armando Espina Zapata, para que se pronunciaran frente a los hechos indicados en el escrito de amparo, por lo que considera el recurrente que teniendo en cuenta que la audiencia en la que se emitió la decisión se dio en el marco del fallo de tutela cuya nulidad y trámite fue decretada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Séptima de Decisión Civil, la Comisaría debe acatar dicha decisión y tener en cuenta las novedades introducidas al proceso.

Considera el recurrente que existió una indebida valoración del material probatorio obrante en el proceso, como quiera que la Comisaría de Familia considera que el Señor Jorge Armando Espina Zapata, no cumple con los criterios de ingreso al servicio Modalidad de Cuidado, mismo que anteriormente se denominó “Centros de Protección Social”, toda vez que percibe apoyo económico derivado de la pertenencia al sistema pensional en el régimen de prima media desde el primero de mayo de 1968, afirmación que no se encuentra respaldada por ninguna certificación o documento que permita confirmar su veracidad y que por el contrario en el curso de los trámites adelantados por los profesionales de diferentes áreas del Hospital Universitario Clínica San Rafael, tendientes a resolver el estado de abandono del señor Espina Zapata, se obtuvo certificación de Colpensiones que da cuenta que en sus bases de datos, éste no figura dentro de aquellos afiliados que se encuentran recibiendo pensión.

Aunado a ello, indica también el recurrente un limitado análisis del concepto de violencia intrafamiliar por cuanto de conformidad con lo previsto con el concepto del ICBF, No. 123 de 2017, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro; para dominar, someter, controlar

o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. Esta comprende varios tipos de violencia entre las cuales se destacan: Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o emocional y violencia económica y que el hecho de que no exista un sujeto activo a quien pueda endilgarse responsabilidad por la situación del señor Espina Zapata, no significa que esta no se esté presentado. Si bien no se evidencia responsabilidad por parte de un familiar o relativo del mismo, la Comisaría, como entidad encargada de la protección, cuidado y bienestar de la familia es la encargada, por mandato constitucional de adelantar todas las gestiones necesarias para amparar los derechos fundamentales de las personas que así lo requieran y que la Comisaria de Familia se limitó a oficiar a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) subdirección para la Vejez, para que adopten las acciones que considerase pertinentes, indicando el recurrente que el artículo 83 de la Ley de Infancia y Adolescencia define las Comisarias de Familia, como entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas en la Ley, por lo que solicita el recurrente que se revoque la decisión proferida y se orden a la Comisaria de Familia de Ciudad Bolívar II, adelantar las acciones correspondientes para amparar los derechos del adulto mayor.

Rituado como se encuentra el trámite propio de esta instancia, entra ahora el Juzgado a desatar el recurso de apelación, con base en las siguientes,

II.- CONSIDERACIONES:

El ideal de la familia es la armonía, la comprensión y el entendimiento que conllevan la estabilidad y la placentera convivencia entre sus miembros. El resquebrajamiento de ese estado, por lo general tiene su génesis en los maltratamientos físicos o psicológicos de que se hacen padre e hijos entre sí o éstos a su prole y demás personas que la conforman. Esas conductas que hacen imposible la comunidad de vida en la familia y que se constituyen en irrespeto entre quienes la componen es deber del Estado prevenirlas y sancionarlas si es que se han producido.

Precisamente con el fin de sancionar las conductas atentatorias contra la estabilidad física, emocional y psicológica de la familia, el legislador promulgó la ley 294 de 1996, mediante la cual desarrolló el artículo 42 de la Carta Política, ley que contiene normas para prevenir, remediar y sancionar los actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Dicha ley contempla en el inciso 1º del artículo 4º que: **“Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al juez de familia o promiscuo de familia; promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.**

Precisado lo anterior, se estudiará entonces si en el caso presente, de acuerdo con las pruebas recopiladas, se demuestra hechos de violencia intrafamiliar.

Dan cuenta las diligencias que el señor Jorge Armando Espina Zapata, de 75 años de edad, se encuentra sin red de apoyo familiar, en situación de abandono, como quiera que la persona que le arrendo la habitación donde residía informó que el mencionado señor no cuenta con apoyo familiar, que es viudo, no tiene hijos y

que la denunciante es quien le ha prestado ayuda, con las necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud llevándolo finamente al servicio de atención hospitalaria debido a la condición de salud del señor Jorge Armando Espina Zapata, situación que fue corroborada en visita domiciliaria realizada por el área de trabajo social de la Comisaría de Familia; sin embargo, advierte la líder del proyecto a la vejez de la subdirección de la localidad de Ciudad Bolívar, que se realizó “consulta en el sistema de Colpensiones donde se logra identificar que el ciudadano presenta incumplimiento en los criterios de ingresos para el servicio Modalidad de Cuidado anteriormente llamados Centros de Protección Social, esto debido a que uno de sus incumplimientos o que los criterios es no percibir apoyo económico o pertenecer al sistema pensional...”

Al realizar la respectiva valoración la autoridad administrativa indicó que: “... no fue posible determinar que el señor JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA haya sido o esté siendo víctima de violencia intrafamiliar más aun cuando se evidencia que su grupo familiar esposa e hijo fallecieron y la red de apoyo familiar (Hermanos) se encuentran fuera del país, desconociéndose su lugar actual de ubicación. Por lo que no es posible acreditar probatoriamente que el señor JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA sea víctima de violencia por algún miembro de su familia o grupo familiar, motivo por el cual no habría lugar a imponer una medida de protección en su contra. A pesar de lo anterior, no se puede pasar por alto la situación actual del adulto mayor JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA quien requiere una especial protección por parte del estado respecto de su salud y vida; motivo por el cual se dispondrá que la Secretaria Distrital de Integración Social SOIS - Subdirección para la vejez adopté las acciones a que haya lugar a favor del adulto mayor JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA”, motivo por el cual resolvió “declarar como no probados los cargos de violencia intrafamiliar que dieron lugar al trámite de medida de protección MP. 278-21 a favor del señor Jorge Amando Espina Zapata, revocar y levantar las órdenes de protección provisionales impuestas a favor del señor Jorge Amando Espina Zapata, en providencia de fecha 08 de octubre 2021; y oficiar a la Secretaría Distrital De Integración Social (Sois 1 - Subdirección Para La Vejez para que se adopten las acciones a que haya lugar a favor del adulto mayor JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA, de conformidad con las competencias y los criterios establecidos por esa dependencia y atendiendo a demás a la carencia de redes de apoyo y su alta estancia hospitalaria a la fecha”.

Precisado lo anterior, encuentra el Despacho que en caso similar la H. Corte Constitucional en sentencia T-032-20, indicó:

“Cuando una persona se encuentra en un estado de necesidad o en una situación de vulnerabilidad originada en su condición de salud y sus familiares omiten injustificadamente prestarle su apoyo y, con ello, afectan gravemente sus prerrogativas fundamentales, el derecho positivo establece un conjunto de mecanismos para hacer efectivas las obligaciones de los parientes derivadas del principio de solidaridad.

5.11. Para ilustrar, teniendo en cuenta que constituye una especie de violencia intrafamiliar el abandono de un pariente cercano que se encuentra en situación de vulnerabilidad en razón de su estado de salud, de conformidad con la Ley 294 de 1996^[73], tal situación puede ponerse a consideración del comisario de familia de la localidad de la víctima con el fin de que adopte “una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente”^[74].

5.12. Sobre el particular, debe tomarse nota de que en las actuaciones adelantadas para enfrentar la violencia intrafamiliar, el comisario de familia tiene un amplio margen de acción para adoptar las medidas necesarias con el fin de proteger a la víctima, pues actúa como una autoridad de carácter jurisdiccional, toda vez que, a través de la Ley 294 de 1996, el Congreso de la República lo “equiparó, en cuanto a esas funciones, a los jueces (Cfr. artículos 11, 12 y 14), al punto de establecer que la apelación de sus determinaciones las conocería el respectivo Juez de Familia o Promiscuo de Familia (artículo 18)”^[75].

5.13. Al respecto, cabe resaltar que el comisario de familia está facultado, por ejemplo, para fijar el pago transitorio de pensiones alimentarias, ordenar el suministro de la orientación y la asesoría jurídica, médica, psicológica o psíquica que requiera la víctima, decretar acciones de atención consistentes en alojamiento, alimentación y transporte, **disponer la inclusión del afectado en**

programas estatales, o proferir cualquier otra medida que estime pertinente^[76].(resaltado en negrilla por el Juzgado)”.

Por lo que encuentra este Despacho que si por una parte el análisis realizado por la autoridad administrativa lo llevo a concluir que no existe miembro o grupo familiar que pueda endilgársele agresión alguna y que por ese motivo no procedía imponer medida de protección; encuentra el Despacho que no le asiste razón a la autoridad administrativa como quiera que el hecho de que no se pueda indicar algún miembro del grupo familiar como responsable, el estado de abandono, debilidad y riesgo en que se encuentra el señor Jorge Amando Espina Zapata, es evidente y en consecuencia, requiere de una medida de protección como quiera que al tener 75 años de edad, pertenece al grupo poblacional de protección especial y que se encuentra establecida en el artículo 13 de nuestra Constitución Política.

Ahora bien, indica la autoridad administrativa que la subdirección de la localidad de Ciudad Bolívar, realizó “consulta en el sistema de Colpensiones donde se logra identificar que el ciudadano presenta incumplimiento en los criterios de ingresos para el servicio Modalidad de Cuidado anteriormente llamados Centros de Protección Social” no obstante, nota este Despacho que no existe prueba alguna de que el señor Jorge Amando Espina Zapata, reciba pensión alguna y su por el contrario requiere de la ayuda por parte del Estado para garantizar con ello el cuidado y la estabilidad del señor Jorge Amando Espina Zapata, máxime cuando tiene conocimiento de su alta estancia hospitalaria a la fecha y como quiera que el artículo 2 de la Ley 2126 de 2021, establece que “...Las Comisarías de Familia son las dependencias o entidades encargadas de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia...” y así mismo, la Secretaría de Integración Social a través de la subdirección para la vejez se encuentra encargada de prestar el servicio institucional a través de los Centros de Protección Social o de cuidado.

Razón, por la cual este Despacho revocara la decisión adoptada por la Comisaria de Familia de Ciudad Bolívar II, el 22 de noviembre de 2021, ordenando en su lugar, imponer medida de protección a favor del señor Jorge Amando Espina Zapata y ordenar a la Comisaria de Familia adelantar las actuaciones necesarias que permitan la ubicación del señor Jorge Amando Espina Zapata, en los Centros de protección Social o de cuidado conforme a las necesidades especiales requeridas por el mismo.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

IV. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la resolución proferida el día 22 de noviembre de 2021, por la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar II por las razones expuestas en la motivación de esta sentencia.

SEGUNDO: IMPONER MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor del señor **JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA**.

TERCERO: ORDENAR a Comisaria de Familia de Ciudad Bolívar II de esta ciudad, adelantar las actuaciones necesarias que permitan la ubicación del señor Jorge Amando Espina Zapata, en los Centros de Protección Social o de cuidado conforme a las necesidades especiales requeridas por el adulto mayor.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Integración Social ubicar al señor **JORGE AMANDO ESPINA ZAPATA**, en los Centros de Protección Social o de cuidado conforme a las necesidades especiales requeridas por el mismo.

QUINTO: ORDENAR a la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar II, de esta ciudad, realizar el seguimiento, sobre el cumplimiento de lo aquí ordenado, hasta la verificación de los derechos del adulto mayor.

SEXTO: REMITIR las diligencias a la Comisaría de Origen, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MEJÍA MEJÍA
LA JUEZ
(2)

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado **No. 033**

Hoy **23 de marzo de 2022**

CAROLINA SANTAMÁRIA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a13cf36f50d3bdbac4ba296c0f5139922484ffb011bcc84c9fce78ad02028944**
Documento generado en 22/03/2022 04:55:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>